



TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL

00414076
-1-

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Núm. de Registro: 955/91

SALA SEGUNDA

ASUNTO: Recurso de amparo interpuesto por Asociaciones de Grandes y Medianas Empresas de Distribución (ANGED).

EXCMOS. SEÑORES:

Don Francisco Rubio Llorente
Don Eugenio Díaz Eimil
Don Miguel Rodríguez-Piñero y
Bravo Ferrer
Don José Luis de los Mozos y
de los Mozos
Don Alvaro Rodríguez Bereijo
Don José Gabaldón López

SOBRE: Sentencia de la la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 19 de febrero de 1991, que revocó en suplicación la dictada por el Juzgado de lo Social núm. 19 de Madrid el 30 de junio de 1990.

La Sala ha examinado la pieza separada de suspensión del recurso de amparo interpuesto por la Asociación de Grandes y Medianas Empresas de Distribución (ANGED).

I. ANTECEDENTES

1. Por escrito presentado en este Tribunal el 10 de mayo de 1991, don José Manuel Villasante García, procurador de los Tribunales, interpuso, en nombre y representación de la Asociación de Grandes y Medianas Empresas de Distribución (ANGED), recurso de amparo contra la Sentencia de la Sala de lo Social de la Au-



TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL

00414069

-2-

diencia Nacional de 19 de febrero de 1991, que revocó en suplicación la dictada por el Juzgado de lo Social núm. 19 de Madrid el 30 de junio de 1990.

2. Los hechos que dan lugar a la presente demanda de amparo son, en síntesis, los siguientes:

a) Determinados sindicatos -FASGA, UGT (Comercio), CCOO (Comercio) y FETICO- formalizaron demanda de conflicto colectivo contra ANGED pretendiendo que el art. 22.3 del Convenio colectivo aplicable -que dispone que "la fecha inicial del cómputo de la antigüedad será la de ingreso del trabajador en la empresa, computándose a efectos de antigüedad, el tiempo en el que el trabajador haya permanecido contratado bajo la modalidad de trabajo para la formación o prácticas con posterioridad al 1º de enero de 1978"- se interpretara en el sentido de que todos los trabajadores tenían derecho al cómputo de la antigüedad desde el momento de su ingreso fuese cual fuese la fecha de incorporación.

b) La citada demanda fue desestimada por Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 19 de Madrid de 30 de junio de 1990.

c) Interpuesto recurso especial de suplicación por las asociaciones sindicales demandantes, fue estimado por Sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 19 de febrero de 1991. Razona la Audiencia, de un lado, que el procedimiento de conflicto colectivo era adecuado para el tipo de pretensión esgrimido y, de otro, la existencia de una reiterada doctrina jurisprudencial favorable a las tesis sindicales lo que conduce a dictar fallo declarando la obligatoriedad de que las empresas reconozcan "el período de duración del contrato de aprendizaje, en prácticas y formación cuando el empleado haya pasado sin interrupción a fijo para calcular el complemento de antigüedad cualquiera que fuera la fecha de ingreso".



TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL

00414070

-3-

3. El recurso de amparo se dirige contra esta última Sentencia, entendiendo infringidos los arts. 28.1 -en relación con el 37.1- y 24.1 C.E. Se solicita la anulación de la Sentencia impugnada, con devolución de actuaciones a la Audiencia para que dicte una nueva respetuosa con los citados derechos fundamentales. Se interesa asimismo la suspensión de la resolución judicial impugnada.

Los argumentos en los que se basa la demanda de amparo son los siguientes:

a) Se afirma infringido el art. 28.1 C.E. -en relación con el art. 37.1 C.E.-. A juicio de la entidad recurrente, la libertad sindical comprende, según reiterada jurisprudencia de este Tribunal, el derecho a la negociación colectiva (SSTC 70/82, 4/83, 12/83, 87/83, 59/83, 74/83, 118/83 y 73/84). En consecuencia, una aplicación judicial del convenio que no sea respetuosa con lo pactado resulta contraria a la libertad sindical. Esta conclusión no viene obstaculizada por el hecho de que el recurso lo interponga una asociación empresarial pues también los empresarios son titulares del derecho de libertad sindical (arts. 7 y 28.1 C.E. -"todos"- y Disposición derogatoria LOLS). Pues bien, en este caso no puede negarse que la Sentencia impugnada ha desconocido directamente lo pactado en el convenio: éste -continuando la tendencia mantenida en los convenios anteriores- ha limitado el reconocimiento de la antigüedad a los contratados en formación cuyo ingreso definitivo se produjo con posterioridad a 1 de enero de 1978. La propia Sentencia reconoce que el convenio establece un límite. Y, a pesar de ellos, emite un fallo radicalmente contradictorio con la previsión convencional.

b) Adicionalmente, se ha infringido el art. 24.1 C.E. "debido a que la ratio decidendi del fallo se encuentra en buena medida justificada en la posible ilegalidad del art. 22.3



TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL

00414071

-4-

del Convenio Colectivo siendo así que la pretensión de los promotores del conflicto colectivo estaba limitada a la interpretación de dicho precepto, sin impugnarse la validez del convenio". Lo que fue planteado como cuestión interpretativa ha sido convertido por la Audiencia Nacional en juicio de legalidad del convenio. Sin embargo, para ello hubiera sido preciso una específica acción de impugnación del convenio, con emplazamiento de la Comisión negociadora.

4. En providencia de 1 de julio de 1991, la Sección Cuarta acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC, conceder plazo común de 10 días a la solicitante de amparo y al Ministerio Fiscal para que formularan alegaciones sobre la posible concurrencia de la causa de inadmisión del art. 50.1.c) LOTC. Realizadas las alegaciones correspondientes, la referida Sección acordó, en providencia de 11 de septiembre de 1991, admitir a trámite la demanda de amparo, con los efectos correspondientes.

5. En otra providencia de 11 de septiembre de 1991, la Sección Cuarta acordó formar, con copia de la demanda de amparo, pieza separada de suspensión y conceder, con arreglo a lo dispuesto en el art. 56.2 LOTC, un plazo común de tres días a la solicitante de amparo y al Ministerio Fiscal para la formulación de alegaciones.

Para la demandante de amparo, es "absolutamente esencial" la concesión de la suspensión interesada. La interpretación del convenio colectivo que realiza la Sentencia impugnada posee "enorme trascendencia económica para las empresas del sector de distribución que puede evaluarse en conjunto en decenas y, posiblemente, cientos de millones de pesetas, dado el amplio colectivo afectado". De hecho, "ya se ha producido un aluvión de reclamaciones individuales ante los Juzgados de lo social esgrimiendo como título para ello la expresada Sentencia". En



TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL

00414072

-5-

este contexto, la no concesión de la suspensión interesada conduciría a la pérdida de la finalidad del amparo pues no se obtendrá lo que se pretende evitar con su interposición, "esto es, que la Sentencia impugnada despliegue sus efectos en otros procedimientos individuales creando situaciones posiblemente irreversibles". Por lo demás, no puede olvidarse que, aunque para las empresas la incidencia económica es elevadísima, desde el punto de vista individual es escasa -ya que las reclamaciones formuladas hasta ahora no superan la cifra de cien mil pesetas-. "La cuestión controvertida en la Sentencia no afecta, pues, al derecho de subsistencia de los interesados que siguen en activo en sus respectivas empresas percibiendo normalmente sus salarios".

El Ministerio Fiscal se muestra favorable a que se acceda a la suspensión interesada. Ciertamente viene entendiéndose reiteradamente por la jurisprudencia constitucional que, en relación con las resoluciones judiciales, el criterio debe ser en principio el de la no suspensión. Sin embargo, en el presente caso "de no suspenderse la ejecución... podría perder el amparo su finalidad por cuanto de otorgarse éste la parte recurrente se vería quizá impedida de recuperar las cantidades satisfechas a consecuencia de la Sentencia que se recurre. Por el contrario, si se denegara el amparo, los interesados no sufrirían las consecuencias de la suspensión pues recibirían lo que les corresponde".

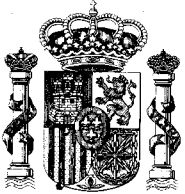
II. FUNDAMENTOS JURIDICOS

1. El art. 56.1 LOTC permite a este Tribunal suspender la ejecución del acto impugnado en amparo cuando la misma "hubiera de ocasionar un perjuicio que haría perder al amparo su finalidad". Se hace preciso, por ello, analizar los perjuicios que, según la organización recurrente, causará la no suspensión de la Sentencia dictada por la Audiencia Nacional a fin de deter-

minar si los mismos son de suficiente entidad como para justificar la adopción de la medida cautelar o si, por el contrario, ha de prevalecer el "interés público en el mantenimiento, en toda su eficacia, de los fallos judiciales" cuya existencia ha declarado reiteradamente la jurisprudencia de este Tribunal (por todos, ATC 294/89).

2. Alude, en primer término, la organización recurrente como perjuicio que justifica la suspensión a la "enorme trascendencia económica para las empresas del sector... que puede evaluarse en conjunto en decenas y, posiblemente, cientos de millones de pesetas, dado el amplio colectivo afectado". El Ministerio Fiscal, que informa favorablemente la suspensión, añade a esta alegación que "la parte recurrente se vería quizá impedida de recuperar las cantidades satisfechas a consecuencia de la Sentencia que se recurre".

Ninguna de estas alegaciones justifica que la Sala acceda a la suspensión solicitada. En términos generales, las consecuencias económicas de la ejecución de una Sentencia judicial consideradas en sí mismas no afectan a la finalidad del amparo, toda vez que si en el futuro el recurso es estimado los perjudicados por aquéllas siempre podrán actuar los mecanismos que el ordenamiento establece para recuperar las cantidades indebidamente satisfechas. Por otro lado, y a pesar del informe del Ministerio Fiscal, no puede admitirse que ese proceso de recuperación haya de tropezar con dificultades especiales toda vez que la propia organización recurrente afirma que los beneficiados por la Sentencia están "en activo en sus respectivas empresas percibiendo normalmente sus salarios". Es claro, por tanto, que los perjuicios económicos alegados -cuya "enorme trascendencia económica" no afecta, por lo demás, a una única empresa sino a las de todo un sector lo que permite relativizarlos- no justifica la suspensión de la Sentencia impugnada.



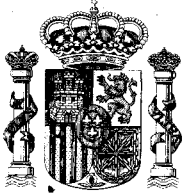
TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL

00414074

-7-

3. La asociación empresarial recurrente funda también su pretensión en la posibilidad de que "la Sentencia impugnada despliegue sus efectos en otros procedimientos individuales creando situaciones posiblemente irreversibles". Se alude, con ello, a la posible eficacia que la Sentencia impugnada en cuanto resolutoria de un procedimiento especial de conflicto colectivo pueda ejercitar en las relaciones entre los empresarios y trabajadores individualmente considerados. Respecto de un problema análogo, hemos llegado con anterioridad a la conclusión de que se debía denegar la suspensión. En efecto, en ATC 85/90, hemos declarado que "sin entrar en la discusión doctrinal acerca de cuál sea la naturaleza, normativa o no, de las Sentencias que ponen término a un proceso cuyo objeto es precisar la interpretación adecuada de un convenio colectivo o texto equivalente y sin ignorar tampoco que, como hemos dicho en alguna otra ocasión, tales Sentencias pueden ser inmediatamente ejecutadas, lo cierto es que la Ley Orgánica de este Tribunal nos faculta para suspender actos de los poderes públicos cuya ejecución causa perjuicios que pudieran hacer al amparo su finalidad, pero no a declarar en suspenso la eficacia de una declaración interpretativa de una norma frente a cuyo contenido no se hace reproche alguno de inconstitucionalidad".

4. Existen, sin embargo, poderosas razones para entender que esta doctrina no es aplicable al supuesto que ahora nos ocupa. Conviene tener en cuenta, ante todo, que, con posterioridad al citado Auto, ha sido promulgada la Ley de Procedimiento Laboral de 1990 que ha clarificado cuál es la eficacia de la Sentencia colectiva. Se establece expresamente que la misma -una vez firme- "producirá efectos de cosa juzgada sobre los procesos individuales pendientes de resolución o que puedan plantearse, que versen sobre idéntico objeto" (art. 157.3). Esta circunstancia puede, en este caso concreto, poner en peligro la finalidad perseguida por el recurso de amparo, que no es otra que la desaparición definitiva de la declaración interpretativa contenida en el fallo impugnado.



TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL

00414075

-8-

En efecto, si el amparo fuera estimado en el futuro, la Sentencia de este Tribunal no sólo comportaría la anulación de la Sentencia impugnada sino que, dadas las lesiones denunciadas por la recurrente, impediría que la Audiencia Nacional pudiera volver a pronunciarse en el sentido que lo ha hecho. De este modo, la declaración interpretativa cuestionada desaparecería de forma definitiva del ordenamiento. Sin embargo, durante la tramitación de este recurso la misma habría venido desplegando, en aplicación del art. 157.3 L.P.L. un efecto prejudicial incondicionado respecto de las reclamaciones individuales con el mismo objeto con la posibilidad de que las correspondientes resoluciones adquirieran firmeza. Por ello, la Sentencia eventualmente estimatoria del amparo carecería de la más mínima virtualidad práctica respecto del problema controvertido.

En virtud de lo expuesto, la Sala acuerda suspender la eficacia de la Sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 19 de febrero de 1991, dictada en recurso especial de suplicación contra la del Juzgado de lo Social núm. 19 de Madrid de 30 de junio de 1990.

Madrid a catorce de octubre de mil novecientos noventa y uno.